



La democracia en Venezuela

LOMBARDI, Ángel

Rector de la Universidad del Zulia (1992-1996)
Rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta (1998-2010)
angel.lombardi@hotmail.com
rector@unica.edu.ve

La democracia como sistema¹

La democracia, como todas las cosas, es producto de la historia; de una larga evolución y de múltiples experiencias. Aunque no tuviera conciencia de ello, el ser humano ha ensayado diversas formas de gobierno y de participación democrática para el autogobierno, la libertad individual y la igualdad social; y la búsqueda de la oportunidad y la riqueza es tan antigua como la misma humanidad. Está en la naturaleza humana la lucha por el bienestar y la cultura, la dignidad y la justicia, la libertad y la igualdad.

Las primeras manifestaciones institucionales concretas de la democracia –tal como la conocemos hoy, inclusive el nombre–, se remontan a la Grecia clásica y concretamente a la ciudad de Atenas, su verdadera cuna. La idea democrática surge como expresión de ciudadanía. El individuo se sabe y se siente formando parte de una comunidad urbana, una comunidad política, económica y social, que trasciende el grupo inmediato, tribal, clánico o familiar. La vida y los bienes de los ciudadanos estaban garantizados por la ciudad, y ésta y su gobierno eran responsabilidad de todos.

Recibido: Octubre 2007

Aceptado: Diciembre 2007

1 Tomado de: LOMBARDI, Ángel (2004). *Ensayos de la inconformidad*. Maracaibo, UNICA.

Es necesario aclarar que, para los griegos, la categoría «ciudadano» estaba limitada a una minoría. Son necesarios muchos siglos de evolución histórica –concretamente a partir del Constitucionalismo Inglés y de la Revolución Francesa de 1789 y el nacimiento de los Estados Unidos de América para que la condición de ciudadano sea ampliada a todos los habitantes de una nación, es decir, veintitrés siglos después.

A pesar de sus debilidades, contradicciones e inclusive degeneraciones –como la demagogia y la anarquía–, la democracia griega y en particular la ateniense fue un ensayo político exitoso. Fue una manera concreta de gobernar y, en algunos casos, adelantándose a siglos de evolución histórica, se crea un orden democrático con instituciones marcadamente populares. Este ensayo de democracia progresiva no es asumido de manera clara y efectiva ni por Roma, ni por el medioevo cristiano, pues ambas épocas se agotaron en un autoritarismo exacerbado. No obstante, la idea democrática se mantuvo latente e incluso se conocieron algunas instituciones y experiencias de tipo democrático.

A nivel teórico, ha existido una continuidad del pensamiento político democrático, siendo el primero y más importante el de Aristóteles, cuyas ideas al respecto conservan plena vigencia. Primero, afirma que la base del Estado democrático es la libertad; segundo, asienta el derecho y el deber de todo ciudadano de gobernar y ser gobernado; tercero, reconoce explícitamente la libertad individual frente al Estado, se vive con independencia y autonomía y se es libre frente al Estado; cuarto, la democracia no es posible si no existe igualdad de derechos para todos, es decir, se propugna de manera categórica una igualdad política y jurídica entre todos los ciudadanos.

Después de Aristóteles, hubo muchos pensadores que elaboraron y mantuvieron ideas democráticas, como la de la representatividad y los derechos del pueblo frente a los gobernantes, aunque la línea dominante fue la teoría política de tipo autoritario y aristocratizante. Hay que esperar el siglo XVI –con la Reforma Protestante, y a la burguesía consolidándose como clase en ascenso y a su expansión mundial desde la Europa occidental capitalista– para presenciar un

renacer vigoroso e irreversible de las ideas y las experiencias democráticas, cuyo primer modelo histórico plenamente realizado lo constituye la sociedad norteamericana del siglo XVIII.

El capitalismo fue el verdadero creador de la democracia moderna, aunque hoy se haya constituido en el principal obstáculo para su desarrollo, ya que ha privilegiado la categoría libertad en detrimento y desmedro de la igualdad. Hoy sabemos que libertad e igualdad son términos insolubles y complementarios; ambos necesarios para poder definir un verdadero sistema democrático.

La teoría política democrática descansa sobre una serie de principios que la humanidad ha ido conquistando, que cuajan y se definen de manera categórica en el siglo XVIII. Se descubre y define la categoría pueblo, que pasa a ser la referencia democrática por excelencia y la fuente de donde emanan todos los poderes, y a partir de la cual se elaboran todas las leyes. Se identifica e individualiza a la persona como ciudadano de una nación; se le ampara y protege frente al poder arbitrario del Estado, y la ley se encumbra por encima de toda otra institución o persona en ejercicio del poder. Con ello se busca controlar el poder y orientarlo en beneficio de todos. Ya Alexis de Tocqueville –observando a la sociedad norteamericana y estudiando el funcionamiento de su sistema político, jurídico y constitucional– vio con claridad que «el principio inherente a la democracia es la igualdad, y que su consecuencia debe ser el esfuerzo del Estado para minimizar las diferencias entre los hombres».

El poder debe ser difundido y compartido, para que el pueblo sea el principal protagonista y beneficiario del sistema, tal como lo asentaba Lincoln en su discurso de Gettysburg: la nación tiene que ser concebida «en la libertad y consagrada a la idea de que todos los hombres son creados iguales», para que así prevalezca «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo».

En los últimos dos siglos se ha avanzado mucho en la conquista de la libertad política y jurídica, aunque no tanto a nivel económico y social. Este desequilibrio o desarrollo desigual del sistema democrático provocará la insurgencia de las diversas ideas y tendencias socialistas como expresión de las clases explotadas y

preteridas en los beneficios del sistema. El socialismo viene a ser el corolario natural de la evolución histórica de la democracia, la superación dialéctica del capitalismo en aras de una mayor libertad y de una garantía cierta de justicia social. Lamentablemente el socialismo histórico terminó negándose a si mismo.

La lucha por la democracia conserva plena vigencia, bien sea para conquistarla, conservarla o mejorarla. Esta perfectibilidad necesaria de la democracia llevó a W. Churchill a calificarla como «el menos malo de los sistemas de gobierno» que el hombre ha creado y conocido, en la medida que el sistema democrático puede mejorar y avanzar.

De allí que los mecanismos de autocontrol y autorregulación sean fundamentales para la democracia, para evitar las múltiples degeneraciones o desviaciones que el sistema puede formar, desde la partidización excesiva hasta la oligarquización; de la demagogia a la anarquía. Fantasma y peligros reales que acechan permanentemente el orden y la vigencia democrática.

En la cultura contemporánea, la democracia ha pasado a ser una palabra mito. En ella, de antemano, presuponemos todas las bondades y todas las soluciones.

No hay sociedad –no importa la ideología y el sistema imperante– que no se defina como democrática. La democracia ha pasado a ser la nueva religión laica de la humanidad. Todo conflicto encuentra en ella su cauce; todo problema, su solución, y los problemas de la democracia se resuelven simplemente con más democracia. Esta actitud mágico-religiosa frente al término democracia nos ha conducido a una actitud ahistórica. La democracia ha sido despojada de su encarnadura real y ha sido transformada en una pura abstracción, en nombre de la cual se ha cometido y se comete cuanto abuso y desafuero se quiere. No hay dictadura y sistema político totalitario que no pretenda, sin embargo, arrojarse con el manto democrático. Todo esto nos plantea la recuperación teórica y práctica de la democracia como sistema histórico concreto, analizable y discutible en sus parámetros económicos, sociales, políticos y culturales.

La democracia como sistema político-histórico se define muy temprano, en Atenas, entre los siglos V y IV a.C., como una experiencia política definida que provoca y produce su propia teorización. Surge, además, como un sistema ideal posible, enmarcado y definido por dos valores fundamentales: la libertad y la igualdad. De esa manera, la democracia real viene a ser la lucha por la libertad y por la igualdad; pero como proyecto, posibilidad y utopía, vendría a ser el reino de la libertad y de la igualdad.

Los demócratas de todos los tiempos han vivido esta dialéctica de realidad y utopía que ha signado su lucha por una sociedad mejor. La idea democrática y la idea de progreso están íntimamente relacionadas, y ambas se asumen desde un optimismo histórico fundamental: la perfectibilidad de la humanidad. Perfectibilidad materializada, a su vez, por el uso creciente de la libertad y la conquista progresiva de la igualdad.

En un texto del siglo IV a.C., el historiador Tucídides pone en boca de Pericles las siguientes palabras:

Nuestro régimen político es la democracia, y se llama así porque busca la utilidad del mayor número y no la ventaja de algunos. Todos somos iguales ante la ley, y cuando la República otorga honores lo hace para recompensar virtudes y no para consagrar el privilegio. Todos somos llamados a exponer nuestras opiniones sobre los asuntos públicos. Nuestra ciudad se halla abierta a todos los hombres; ninguna Ley prohíbe la entrada en ella a los extranjeros, ni les priva de nuestras instituciones ni de nuestros espectáculos; nada hay en Atenas oculto, y se permite a todos que vean y aprendan en ella lo que bien les pareciere...

Confiamos para vencer en nuestro valor y en nuestra inteligencia. Tenemos el culto de lo bello y cultivamos la filosofía, sin que eso debilite nuestro carácter. Si poseemos riquezas no es para guardarlas ociosas ni para envanecernos de su posesión, sino para emplearlas productivamente. Para nadie es vergonzoso entre nosotros confesar que es pobre; lo que sí es vergonzoso es no tratar de salir de la pobreza por medio del trabajo. Todos los ciudadanos, incluso los que se dedican a los trabajos manuales, toman parte en la vida pública; y si

LOMBARDI, Ángel

hay alguno que se desinteresa de ella se le considera como hombre inútil e indigno de toda consideración. Examinamos detenidamente los negocios públicos porque no creemos que el razonamiento perjudique a la acción; lo que sí creemos perjudicial para la patria es no instruirnos previamente por el estudio de lo que debemos ejecutar.

Me he detenido y extendido en esta cita de Tucídides porque ella, por sí sola, es todo un programa democrático, vigente y actual: libertad del ciudadano, igualdad ante la Ley, deber de participación, importancia de la educación y el trabajo. La sociedad, no el Estado y mucho menos el gobierno enmarcan al individuo sin menoscabo de su dignidad y su bienestar, y con todas las oportunidades necesarias para garantizar su autodesarrollo, información participación con tolerancia, frente a propios y extraños. Con todo esto lo que se quiere expresar es que, en definitiva, la democracia no solamente es un sistema político y social sino, además, y fundamentalmente, una ética, una cultura, una mentalidad, un sistema de vida, un comportamiento.

La democracia no es real si no es internalizada como un sistema de valores por todos los ciudadanos; valores que, en última instancia, no son otra cosa que la libertad y la igualdad. Todo el pensamiento antiguo y posterior insiste en esto. Aristóteles afirma que sin igualdad la libertad no es posible. Cicerón reitera la misma idea. Y aunque en los siglos siguientes se privilegió el principio de libertad sin abandonar el principio de la igualdad, en la práctica hubo un divorcio real entre ambos postulados. Hoy vuelve por sus fueros el binomio libertad-igualdad, de lo contrario la democracia seguiría siendo más una inspiración que una realidad. En aras de la libertad hemos construido sociedades de desigualdades; es decir, el «gobierno de los muchos por unos pocos». La democracia para los trabajadores y las mayorías está por conquistarse, y esa es nuestra verdadera utopía. La historia no solamente como hazaña de la libertad sino, también, de la igualdad.

Frente a la democracia real se ha desarrollado una democracia mito que tiende a suplantar a la primera. Vaciada de pueblo, so-

brevive en la retórica oficial. La democracia como idea y como proyecto político es una derivación de la idea de progreso. Por eso la democracia se concibe perfectible, en tránsito hacia una mayor libertad e igualdad de los individuos y las comunidades. Este evolucionismo orgánico –como concepción del hombre y la historia– es la teoría fundamental de la cultura contemporánea, conjuntamente con el dominio tecnocientífico de la naturaleza y el derecho a la felicidad personal o colectiva.

Inmersos como estamos en una gran crisis histórica, se hace necesario volver a interrogarse sobre los fundamentos de nuestra cultura. En el caso de la democracia, hay que volver a reflexionar sobre la idea y sobre la realidad de la libertad y la igualdad y en cada país en particular.

Democracia política y militares

Es axiomático en la historia que los militares siempre han estado vinculados al poder o lo han ejercido directamente. Los romanos, sabios en estas cosas del poder y la política, por ley, tenían prohibido que un general victorioso pudiera pasar a territorio italiano con su ejército. El general recibía todos los honores pero desarmado, cuando Julio Cesar decide asaltar el poder, rompe esta norma y con su ejército llega a Roma y toma el poder, es el famoso paso del Rubicón. Su posterior asesinato se justificó como un tiranicidio para castigar a quien había mancillado la ley y la República.

Hablar, entonces, de «militares, poder y política» no constituye ninguna novedad histórica. Lo asombroso es lo contrario: cuando se profesionaliza y despolitiza a las Fuerzas Armadas y se subordinan al poder civil. En América Latina, los militares entran en la política activa con las guerras de emancipación y no han salido más nunca de ella. A veces, su permanencia ha sido abierta y directa; otras, embozada o disimulada. Su presencia «libertadora» terminó siendo opresiva y depredadora, lo que llevó –en el Cono Sur, a mediados del siglo XIX– a acuñar la frase «Liberados de la colonia, ahora quién nos libera de los libertadores».

En la práctica, en nuestra historia siempre ha existido un «Partido Militar» con el agravante que está armado con las armas que la República puso a su disposición para otros fines. En esta historia común de militarismo compartido por todos los países de América Latina, como es lógico, hubo países más civilistas unos; otros más militaristas. Entre los primeros destacan Chile, a pesar de Pinochet, y Uruguay; en los segundos, lamentablemente, está Venezuela en lugar destacado. Nuestros dictadores son de antología: Antonio Guzmán Blanco, Cipriano Castro, Gómez, Pérez Jiménez y el aprendiz que nos gobierna haciendo méritos para quedarse, según sus deseos, por lo menos hasta el 2021, no importa cómo.

El militarismo venezolano es de vieja data y arraigada tradición, pero desde 1958 y en especial con la Constitución de 1961, se avanzó significativamente en la profesionalización de las Fuerzas Armadas, en la subordinación al poder civil y la no deliberación. Lamentablemente, esto terminó en 1992 con la intentona golpista; con la democracia boba que teníamos y con el éxito electoral del teniente coronel. Con la Constitución de 1999, se legaliza y legitima este asalto militar al poder y al gobierno, otra vez Venezuela es gobernada desde el cuartel. ¿Por cuánto tiempo más?

El «Partido Militar»

La política es la guerra con otras armas –sostenía Von Clausewitz–, y si la política la hacen los militares como está ocurriendo en Venezuela, corremos el riesgo de que la política se nos convierta en una guerra, en un combate permanente: la intimidación psicológica, la concentración del poder de fuego en el punto más débil, la iniciativa y la sorpresa; los flancos débiles, la utilización de cualquier medio para obtener el objetivo final, que no es otro que la aniquilación del adversario o la rendición incondicional.

La política en Venezuela vuelve a recordar el escenario bélico, y los contendores se asumen ferozmente en una lucha sin cuartel y sin concesiones. En otras palabras, volvemos a la concepción primitiva de la política. En esto también hemos retrocedido al siglo XIX. La historia no se repite, pero en esta tierra de compadres no es

la primera vez que estos se enfrentan. Monagas y Páez; Crespo y Guzmán; Gómez y Castro; Chávez y Arias; Chávez y Baduel. Es la lucha por el poder y la preeminencia.

Por algún tiempo excomandantes y excompañeros van a marcar la política nacional, cada uno con su ambición y razón; cada uno con su grupo militar y su sector civil subordinado. Lamentablemente, no vivimos un tiempo de civiles ni de civilidad, el pueblo es un mero espectador –crédulos unos, escépticos otros–, mientras el estamento militar arbitra y decide la política nacional.

No hay nada más riesgoso para una sociedad que los militares fuera de los cuarteles. No es la primera vez que esto ocurre y en Venezuela y en América Latina. Ha ocurrido con demasiada frecuencia en detrimento de nuestra democracia y civilidad. La región andina vuelve a desestabilizarse, y otra vez la guerra y la violencia se enseñorean de nuestros países. Colombia se ha fragmentado en varios estados internos en pugna armada. En el pasado reciente, Ecuador ha entronizado a los militares como árbitros; igual que Perú y Bolivia y, lamentablemente, Venezuela regresa a tiempos a los gobiernos militares, a pesar de que muchos ilusos los creíamos enterrados para siempre. La historia se nos convierte en un «eterno retorno» lleno de fantasmas y demonios que no terminamos de exorcizar.

Militares, poder y política

La actual polémica política de América Latina se alimenta, en gran medida, del mundo castrense. Una realidad habitualmente poco conocida, con mucho poder y poco visible. La actual coyuntura política, y la constitución vigente, han convertido a los militares en actores principales, con sus virtudes y defectos, como cualquier otro grupo político de poder. En su caso, el mito se ha roto y su verdadero rostro ha sido develado: de venezolanos como nosotros, bastante comunes y corrientes, por cierto, atrapados en sus intereses y limitaciones, empezando por el teniente coronel presidente.

La discusión de fondo versa sobre su lealtad a la Nación y al Estado. En teoría no hay duda: están al servicio de la Nación; en la práctica terminan sirviendo al gobierno de turno. Si no resuelven

este problema, la institucionalidad seguirá resintiéndose y no pasará de ser un partido político armado con sus facciones en pugna. Si los militares no regresan pronto a sus cuarteles y a sus funciones específicas, esta maltrecha «democracia tutelada» no saldrá de su crisis de gobierno y, por ende, el desarrollo se alejará cada vez más de nuestras fronteras.

En Venezuela, la civilidad está maltrecha y mancillada. No hay otra urgencia política sino regresar a los militares a sus funciones específicas. Igualmente, es necesario crear las condiciones para promover una nueva élite política, más honesta y más competente, e instar a toda la sociedad venezolana a un profundo proceso autocrático que nos obligue a todos a desarrollar conductas cívicas y solidarias en aras de una nación urgida de modernidad y desarrollo.

Dictadura y Militarismo

En América Latina, y en Venezuela en particular, el sable y el fusil siempre han estado presentes en nuestra historia, para mengua del ciudadano y la sociedad civil. Es un fenómeno recurrente. Hemos dicho que, recién finalizada la independencia, ya se clamaba por quién nos iba a librar de la plaga de los libertadores. Después fueron tantos los tiranos y tiranuelos que, en el siglo XX, no había otro anhelo que el desarrollo de la democracia y el gobierno civil.

Algo avanzamos, pero «la enfermedad militarista» siempre nos alcanza. En pleno siglo XXI, a los venezolanos nos ha tocado ser gobernados por un bárbaro salido de lo más primitivo de nuestra patria, incubado en el cuartel, y creado por una sociedad enferma y profundamente extraviada. La «epidemia militarista» amenaza con extenderse en este golpeado norte del continente sudamericano.

El profesor Antonio Pérez Estévez nos recordaba –en un artículo aleccionador– la fuerte impronta militarista de la historia nacional. Todo el tiempo asaltando y usufructuando el poder y manipulando la Constitución, como en la llamada Revolución de las Reformas, de 1835; la Revolución de Mayo, de 1858; el golpe militar del General Falcón, en 1859; el golpe militar de J.A. Páez, en 1861; la presencia militar de Guzmán Blanco en el poder, en 1863;

la Revolución Azul, de José Tadeo Monagas, en 1868; la Revolución Liberal-Restauradora, de Cipriano Castro, en 1899; la Revolución Libertadora, de 1901; la dictadura cuartelaria de J. V. Gómez, hasta 1935; la Revolución de Octubre, de carácter cívico militar, en 1945; el golpe militar de 1948; el golpe frustrado de Puerto Cabello, en 1961; el Carupanazo, la guerrilla y las muchas intentonas golpistas de los años 60, hasta retornar a la perversa tradición con los intentos fallidos del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, y el 11 de abril incluido.

Todo esto es lo que me ha llevado afirmar que la única novedad de Chávez es que no constituye ninguna novedad. Él, su revolución y su ideología no son otra cosa que manifestaciones patológicas de nuestro atraso social, político e institucional.

La historia es fundamentalmente tiempo que transcurre; pero, contrariamente a la teoría del tiempo único y progresivo, lo real está constituido por los muchos tiempos que coexisten. Así como hay una modernidad y pueblos instalados en esa modernidad, otros permanecen anclados en estadios evolutivos anteriores, inclusive en tiempos equivalentes a la prehistoria. Otras sociedades mantienen en su seno grupos diversos con usos, costumbres y mentalidades mezcladas. Es nuestro caso. Países a medio hacer, a medio camino entre la modernidad y la premodernidad. Podemos usar tecnología de punta y tener actitudes y conductas primitivas o mágicas; vivir en una ciudad y tener o mantener conductas rurales.

Este tipo de sociedad desigual y contradictoria va a reproducir sus contradicciones y limitaciones históricas en todos los niveles, incluidas las estructuras institucionales, jurídicas y políticas. Ello ayuda a explicar el actual gobierno, muchas de sus políticas, su ideología y su imaginario.

Los procesos históricos son complejos, por definición, y, además, de largo plazo. Sus causas y efectos sólo son comprensibles bajo una revisión retrospectiva. Los hechos históricos no se anticipan, simplemente ocurren y cuando ocurren desbordan las mejores y más clarividentes previsiones. La vida siempre va por delante y –aunque el hombre siempre se repite a sí mismo– los im-

ponderables y el azar siempre están presentes. Igualmente podemos hablar de tendencias o «leyes» de la historia, especialmente en la economía y en la sociedad, que son determinantes para definir el proceso social y político. También existen características generales y analógicas a tomar en cuenta en los procesos históricos, pero nunca de manera mecanicista o determinista. La libertad humana es la característica más importante de la historia y por eso la humanidad no cesa de buscarla. Libertad y justicia son los valores que guían la historia.

Azar y necesidad, codicia y poder siempre presentes. Lo material es determinante en la evolución humana, pero son, en definitiva, los valores espirituales y culturales los que definen la historia, incluido el avance tecnocientífico. La historia no es un salto al vacío. Es cambio, pero igualmente continuidad, y las sociedades tienden a la estabilidad con la misma fuerza que no pueden anular la necesidad de cambio. Los procesos políticos tienden a acentuar el espejismo del cambio en un avanzar en círculo a diferencia de la tecnociencia que nos impulsa hacia adelante de manera definitiva e irreversible. La carreta pertenece inevitablemente al pasado, la imaginación al futuro; pero la ambición de poder y la tentación autoritaria siempre son contemporáneas, siempre se remiten a sí mismo.

Estas ideas vienen al caso por lo que estamos viviendo. Un combate entre la modernidad y la premodernidad; una sociedad que quiere avanzar en democracia y bienestar, y un sistema que no termina de definirse democráticamente. El proceso abarca casi todo el siglo XX y sus fechas más significativas son 1936, 1945, 1958, 1989, 1992 y los días que corren desde el año 99.

La independencia fue fácil comparada a la construcción de la República. Hemos tenido repúblicas oligárquicas y repúblicas autoritarias, y todavía no terminamos de tener una República verdaderamente democrática. La del 58 terminó tutelada por la corrupción y la pobreza, y la que se nos propone, todavía sin definir, proyecta amenazadoramente la tutela militar.

La rebelión del 92 –con su «Acuso, protesto y me rebelo»–, se legitima el 6 de diciembre con el triunfo de Chávez, quien emer-

ge triunfante de las ruinas de una democracia tonta. Fueron los tiempos de Constituyente que el país alimentó desde la lejana década de los 80 y que fue desvirtuado en un proceso alocado de miopías, torpezas e inmadurez. El presidente debe reflexionar y rectificar, especialmente en su concepción «unitaria y exclusiva» del poder presidencial que nos retrotrae al famoso «El Estado soy yo» de Luís XIV. Concepción francamente premoderna, peligrosamente autoritaria y concentradora del poder. Si algo hemos padecido en Venezuela es el excesivo presidencialismo que siempre termina por minimizar y anular a los otros poderes.

La teoría y la práctica democrática descansan sobre la división y el equilibrio de poderes, real y efectivo, y en Venezuela esto nunca ha sido así y de allí nuestro atraso institucional y político. La modernidad política está en limitar el poder presidencial. Prohibir la reelección de manera absoluta; crear un jefe de gobierno responsable y removible, y diferenciarlo de la Jefatura del Estado. Un Ministro de la Defensa civil y una Constitución que cree un equilibrio entre deberes y derechos; así como un federalismo cooperativo que fortalezca las regiones sin sacrificar la nación y viceversa. Con la Constituyente de 1999 tuvimos una oportunidad única de hacer historia hacia delante, y nos volvieron a frustrar los viejos fantasmas y demonios de nuestra historia.

El secreto o la explicación de nuestro constitucionalismo hay que buscarlo, como es obvio, en nuestra propia historia. En Venezuela, las constituciones han sido fundamentalmente presidencialistas; era el traje a la medida que le exigía, por ejemplo, José Tadeo Monagas a sus leguleyos. Después de casi 200 años de República sigue siendo fundamentalmente así. El amo del poder de turno, además, violaba la Constitución cuantas veces le conviniera a sus propósitos hegemónicos y, sobre todo, para perpetuarse en el poder, todo lo cual llevó a José Gil Fortoul a decir que la historia constitucional venezolana es la violación sistemática de la constitución, principalmente por quienes la habían hecho para usufructuar el poder.

No fue así en 1961, cuando hubo una Constitución pactada entre los sectores políticos. Duró casi 40 años y es la excepción a la

regla, igual que las Constituciones de 1864 y la de 1936. En total hemos tenido 27 sucesivas Constituciones, incluida la de 1821 que rigió para la Gran Colombia; el estatuto Constitucional Provisorio de 1914 y la actual bolivariana. 27 Constituciones en menos de 200 años da una Constitución cada 6 años. Si eliminamos los 40 años de vigencia de la del 61, nos da la alucinante cifra de que cada 4 años estamos reformando o cambiando de Carta Magna la cual, por definición, está hecha para durar. En Venezuela sucede todo lo contrario y es que aquí la política y el Estado se definen como el gobierno de los hombres y no el gobierno de las leyes, tal como lo exige y quiere la modernidad.

De allí que estoy seguro que la actual Constitución –reformada o sustituida– durará lo que dure el actual presidente en el poder.

Venezuela, una democracia secuestrada

Como país, pareciera que –con excepción de la independencia– estaríamos empeñados en llegar siempre tarde al futuro. El siglo XX, según Picón Salas, empezó realmente en 1936, con la desaparición física del dictador Juan Vicente Gómez, heredero y albacea del sistema político decimonónico, marcado a sangre y fuego, por los caudillos de turno: Páez, Monagas, Antonio Guzmán Blanco, Crespo y Cipriano Castro. Igual nos está sucediendo con el siglo XXI, que no termina de llegar, frenado o retrasado por el bipartidismo «cogolocrático» de las últimas dos décadas del siglo XX y sus caudillos civiles. Chávez viene siendo una consecuencia anacrónica de este caudillismo militar y civil que nuestra tradición histórica y constitucional tipifica muy bien en el presidencialismo exacerbado de nuestro sistema político. En consecuencia, la crisis del sistema se prolonga en el tiempo, en la medida que hemos sido incapaces de reformar y adecuar el sistema político en términos de modernidad y democracia.

Igualmente, nuestra sociedad se encuentra atrapada entre una mentalidad y unas costumbres premodernas y las exigencias de una racionalidad plenamente moderna que abreva o se inspira en la teoría política de los últimos 300 años, en la que la expresión y la

práctica democrática están emblemizadas en fechas como 1688, 1776 y 1789 (la Revolución Inglesa, la Independencia Norteamericana y la Revolución Francesa).

El renacimiento, la «Utopía» de T. Moro, la Revolución de los «iguales» de Cromwell, la independencia norteamericana, con la Reforma Protestante y la Revolución Industrial, van configurando un proceso histórico y un pensamiento que culmina en la Ilustración y toda la teoría democrática de la sociedad y del gobierno y que arranca del principio fundamental –plenamente vigente hoy en día– según el cual los individuos y las personas son seres libres y responsables.

Nuestra sociedad y sistema político proceden y forman parte de esta tradición eurocéntrica, que genera una crítica válida desde el punto de vista de la diversidad antropológica y cultural, pero que la realidad histórica –a la cual no escapa ningún país del mundo– nos obliga a asumir. Los ejemplos sobran y es suficiente con China, país diverso y complejo y mucho más antiguo que Europa, pero cuyo sistema político es profundamente occidental, tanto en su versión comunista como en su apertura capitalista y es que los chinos –pueblo práctico por excelencia– se definen como un estado y dos sistemas.

La sociedad venezolana y el sistema político nacional no escapan a esta tradición –de origen básicamente europeo y occidental–, pero que hoy se ha universalizado y, lógicamente, enriquecido con el aporte de las diversas culturas y pueblos. Venezuela forma parte de esta realidad histórica y nuestra sociedad se encuentra a medio camino entre la premodernidad y la modernidad; entre el subdesarrollo y el desarrollo. Drama y circunstancias que en su momento vivieron personajes de nuestra historia como Bolívar, Simón Rodríguez, Miranda y tantos otros «ilustrados» atrapados entre una realidad bárbara y primitiva, y un deseo y una necesidad de construir un sistema político moderno y democrático. De allí la desesperanza final del Libertador, al pensar que la independencia había sido mucho más fácil que fundar y desarrollar la República; convicción agónica que también compartía Simón Rodríguez, al ver que no había ciudadanos para fundar la República, y que Mi-

randa sintetizó muy bien al decir que sólo sabíamos hacer y vivir en el «bochinche». Parte del drama nacional es que Carujo se le sigue imponiendo a Vargas, por el mismo hecho que seguimos siendo una sociedad insuficientemente moderna.

En Venezuela nunca hemos sido, en sentido político, plenamente libres. La libertad entre nosotros ha estado más cerca de la anarquía que del derecho. El poder y el deber no se han equilibrado suficientemente. El primero ha tendido a abusar para prevalecer y dominar, configurando un poder despótico y arbitrario, inclusive en los llamados gobiernos democráticos. Como contraparte, el ciudadano ha tendido a evadir su responsabilidad y usualmente ha entregado su libertad a cambio de la promesa del demagogo y las migajas del poder. Presidencialismo y paternalismo de Estado es la verdadera tragedia de nuestro sistema político.

Nuestra sociedad se empeña en cultivar su propia minoridad, con la complacencia de sus dirigentes y «elites» y se mantiene distante e indiferente al *Sapere Aude* que Kant proclamaba como esencia y fundamento de la Ilustración y la modernidad, y que no significa otra cosa que «Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento», base y fundamento de la responsabilidad y la libertad.

En las sociedades y culturas conviven tiempos y mentalidades diversas, creencias, costumbres y conductas que van desde lo más primitivo hasta lo más moderno. En ese sentido, el Estado venezolano ha fracasado, parcialmente, al integrar a toda la sociedad en un solo Estado Nacional, entendido no sólo como soberanía, sino, además, como integración efectiva de toda la sociedad.

En el siglo XIX, el país vivió fragmentado y enguerrillado. En el XX, a pesar de la integración nacional forzada por JV Gómez, facilitada por la economía petrolera y continuada por la Venezuela de los partidos políticos y la democracia, el país siguió básicamente desestructurado e invertebrado con su pesada carga social de pobres y marginados, y con su precariedad jurídica y política. El poder, el dinero, los privilegios y la «viveza» condicionaron y prevalecieron en la vida social. Frente al Estado legal, ineficiente y extraviado, existe otro Estado ilegal y deshonesto, pero que resuelve, aunque sea a

destiempo y con pago de comisión. Quien cínicamente lo ponga en duda, simplemente trate de ejercer su ciudadanía por la vía legal y trate de obtener cédula, pasaporte, carnet de conducir y muchos otros trámites legales sin gestoría, influencia o comisión.

El Estado venezolano, en su funcionamiento y desempeño, sigue siendo fundamentalmente premoderno y atrasado y, por consiguiente, todo el sistema social y político es causa y consecuencia del mismo atraso. Este drama de atraso histórico, subdesarrollo e incompleta modernidad lo compartimos con la mayoría de los países asiáticos y africanos, configurando un mundo altamente desequilibrado y explosivo.

La responsabilidad de esta situación es compartida por unos países colonialistas e imperialistas que propiciaron y se aprovecharon de esta situación, pero igualmente de unas «elites» locales, cómplices y beneficiarias de este sistema de explotación. Dependencia y dualidad, tesis insuficiente, pero que en su momento sirvió de marco teórico para explicar y entender nuestro subdesarrollo, hoy amenazado, además, por una globalización acelerada y desigual.

El reto es asumir la reforma política sobre la base de la perfectibilidad y progresividad de la historia teniendo como base la teoría y práctica política moderna y nuestra propia experiencia histórica, que no es nada desestimable. En el siglo XX venezolano, la sociedad y el país político empezaron a transitar el camino democrático con el consiguiente pluralismo y debate ideológico, la aparición de los partidos políticos y todo tipo de organización sindical y civil. Asumimos el voto y las elecciones, con todo y sus desviaciones tramposas, como una cultura de opinión y participación.

Somos una sociedad aceptablemente tolerante y diversa, sin mayores problemas étnicos o religiosos. Imperfectamente logramos sacar adelante una democracia, hoy más urgida que nunca de reformas y adcentamiento, y esa es la principal tarea en esta coyuntura crítica que vive el país. De manera dialéctica y creativa, hay que integrar las diversas etapas de nuestra contemporaneidad, sin exclusiones de ningún tipo pero, igualmente, sin impunidad.

El Estado moderno se funda en el equilibrio entre el poder y el derecho; entre la libertad y la responsabilidad. Cómo evitar la tiranía, se pregunta Montesquieu, en 1689, «Creando y articulando 3 poderes (legislativo, judicial y ejecutivo) que deben concertarse entre ellos y subordinarse a la ley general». El más fácil de corromperse es el poder ejecutivo y con él la fuerza militar: «El ejército siempre desprecia a los senados y respeta a sus capitanes». Y el autor es igualmente drástico con respecto a la corrupción: «A toda persona convicta de robar administrando los intereses públicos, pena de muerte».

Larga es la memoria humana y persistente el deseo de un mundo mejor. El ideal democrático, como tantas otras cosas, nace en Grecia. A nivel historiográfico fue inmortalizado por Tucídides –a través del discurso de Pericles–, elocuencia que asume Lincoln, muchos siglos después, en Gettysburg, tal como hemos dicho. La democracia no sólo es un sistema político sino una cultura y evidentemente una historia de luchas, encuentros y desencuentros. Pero es, ante todo, y fundamentalmente, un empeño racional por conquistar y preservar –para todos los seres humanos– la libertad como eje y fundamento de una sociedad justa y fraterna.

Emblemáticamente, la Revolución Francesa lo proclamó al mundo. Autores como Locke lo expresaron de manera directa y práctica: «Siendo iguales e independientes nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones». Para lograrlo, los individuos ceden voluntariamente parte de su libertad a cambio de seguridad. De aquí surge la legalidad y la legitimidad del Estado Moderno, único garante, con fuerza y poder real para ello, para que lo expresado por Locke, Spinoza, Hobbes y Hume se pueda cumplir.

Pero el Estado no es omnipotente y, por el contrario –dado el poder concedido por el pacto o contrato social–, tiene que ser limitado y controlado. Toda la teoría política moderna democrática gira en torno a la división y al equilibrio de los poderes, y al principio universal de la igualdad ante la ley y la subordinación de todos a la misma, comenzando por los gobernantes y poderosos y, en particular, por el poder militar subordinado absolutamente al poder civil.

El otro problema es el de la gobernabilidad y la legitimidad; legitimidad de origen y de desempeño. Ningún gobierno puede durar, más allá del lapso legal establecido, si no recibe la confianza y el apoyo del ciudadano, y para ello la honesta rendición de cuentas es fundamental. El Estado y el gobierno moderno son descentralizados, con una relativa e importante autonomía local y regional, y ello, entre otras razones, porque la sociedad está primero que la política. De hecho, la primera genera la segunda y no a la inversa. Kant lo expresó de manera muy clara: “La felicidad y el bienestar no pueden depender de la benevolencia del líder o del Estado, el populismo es el peor despotismo y condena a los individuos y a los pueblos a una permanente minoridad”.

Es esencial a la democracia la dialéctica de los contrarios; es decir, el pluralismo confrontacional en términos ideológicos, políticos y de libre debate y discusión. De allí que en una democracia, tan importante es el gobierno como la oposición. En la sociedad moderna ningún gobierno satisface todas las expectativas y demandas de la población. En primer lugar, porque los seres humanos nunca están satisfechos y siempre elaboran nuevas demandas y desarrollan nuevas necesidades, especialmente en el mundo moderno, atrapado entre el consumismo y la revolución tecnocientífica. Parte de la ingobernabilidad y conflictividad de nuestra época tiene que ver con todo esto. Además, existe la tendencia –en nuestro país muy acentuada– de anteponer nuestros derechos a nuestros deberes. De este modo, la insatisfacción ciudadana es mayor en la misma medida que ese ciudadano no tenga o no haya tenido acceso a mayores niveles de libertad y de cultura.

El poder en el Estado moderno, especialmente en las últimas décadas, pierde eficacia porque se hace más disperso, difuso y despersonalizado, y porque los factores y problemas internacionales tienden a limitar e interferir con el Estado nacional tradicional, que cada vez luce más desfasado y anacrónico con respecto a la nueva geopolítica de globalización, unipolaridad, terrorismo y pobreza generalizada (80% de la humanidad, aproximadamente), y todo ello enmarcado en una revolución científica-técnica, aparentemente desbocada, cuyo mejor ejemplo es el fenómeno Internet, el lla-

mado 7º continente, organizado y controlado por el primer mundo a través de 12 servidores, 9 de los cuales son norteamericanos, 1 japonés y 1 inglés (Datos del año 2000).

El poder, como nunca, descansa en la tecnología y en el monopolio científico, en donde América Latina no representa ni el 2 % de los descubrimientos y de la innovación tecnológica. El concepto de soberanía nacional ha sufrido un fuerte menoscabo en los últimos años. Defendido en su momento por personajes tan disímiles como el presidente norteamericano W. Wilson y el líder de la revolución bolchevique, Lenin, fue un dogma político del siglo XX, hoy en rápido declive y desuso frente a problemas que trascienden las fronteras nacionales y exigen soluciones globales.

La economía se globalizó definitivamente y, en especial, el sector financiero. El terrorismo es un problema internacional por definición, especialmente después del 11 de septiembre de 2001. El hambre y la pobreza están en el centro de la estabilidad y el equilibrio del mundo; la guerra y la paz del planeta mucho tiene que ver con ello. Igual los problemas ambientales, que son problemas de sobrevivencia para toda la humanidad. El mundo se hace pequeño e inestable y Venezuela forma parte de él, y de manera importante tomando en cuenta nuestra condición de país petróleo.

¿Cómo llegamos hasta aquí?

De creer a Kant, la humanidad –y, por consiguiente, cada país– progresará de manera sostenida, con sus avances y retrocesos inevitables, pero siempre superados por el proceso indetenible de la historia hacia el futuro, asumido ésto positivamente «como un incesante progreso hacia lo mejor». Vista así, la historia venezolana, enmarcada en la historia de América Latina y el mundo, es un proceso de avance, no siempre al mismo ritmo y velocidad, y no exento de contradicciones y aparentes retrocesos.

El siglo XIX –fundacional de nuestra nacionalidad– lució precario y con ausencia manifiesta de una sociedad que no terminaba de constituirse e identificarse; lo regional y local predominaban sobre lo nacional y la violencia y la guerra gobernaban el país más

allá del derecho y la Constitución. Esta situación cambió con Gómez y a pesar de él, porque estuvo mucho tiempo en el poder (27 años), y gracias a los cambios radicales que impulsa la explotación petrolera en la sociedad venezolana. Eramos un país de escasos 2 millones de habitantes rural y bombero en muchos sentidos y asolado por enfermedades crónicas y generalizadas.

López Contreras, Medina Angarita y Pérez Jiménez de alguna manera expresan la misma situación de un poder autoritario y conservador, obligado a cambiar –también a pesar de sí mismo– debido a los impulsos modernizadores que atravesaban la sociedad venezolana impulsados por la económica petrolera, en un mundo fuertemente sacudido por procesos políticos, económicos y sociales de gran complejidad, dinamismo y proyección (Revolución Rusa, 1917; Nazi-fascismo, 1922–1932; la Gran Depresión, 1929; primera y segunda Guerra Mundial, 1914-1945).

Debido a estos factores internos y externos, la sociedad venezolana –como masa y pueblo– irrumpe en la historia nacional, no ya como simple objeto histórico, como sucedió en el siglo XIX, sino como sujeto activo y protagónico de la historia nacional, expresado fundamentalmente en la aparición de los partidos políticos y de los sindicatos en la década de los 40, así como en la conquista del derecho al voto y a las elecciones como el nuevo árbitro de la política nacional. Esto explica los hechos de febrero de 1936 y el 18 de octubre de 1945, así como el 23 de enero de 1958. Tres fechas orgánicamente relacionadas y cuyo principal beneficiario político e histórico fue Acción Democrática, y en menor grado COPEI, producto de la sintonía con el país y la sociedad venezolana lograda por el liderazgo de ambas organizaciones, así como por las torpezas y errores de sus adversarios políticos. El premio para ambas organizaciones fue el control del poder y el Estado por casi 40 años, la más larga hegemonía política que ha conocido el país.

La coyuntura de 1998 que lleva a Chávez a la presidencia se explica por la situación de crisis y deterioro que el país venía sufriendo, desde finales de la década de los 70 emblemático en las fechas y acontecimientos de 1983 (Viernes Negro), 1989 (Caraca-

zo), 1992 (intento fallido de Golpe de Estado), y cuyo detonante visible era la corrupción galopante del sistema y la ineficiencia progresiva del Estado. El poder y el gobierno terminaron de espaldas al país y ello explica el apoyo masivo y la abrumadora victoria electoral de Chávez, quien encarnó políticamente un gran rechazo nacional a la vieja política, más que un apoyo y una identificación con un proyecto político y un programa de gobierno.

Otro de los dramas políticos de los últimos años consiste en no saber realmente hacia dónde vamos como sociedad. De allí el extravío del presidente con respecto al futuro, más allá de su retórica «revolucionaria» y de sus innegables ansias de poder. Pensar que Cuba es un modelo, es estúpido e ingenuo a la vez; igual que ignorar la geopolítica imperante hegemonizada por los Estados Unidos y Brasil. Pero lo más grave del presidente y su gobierno es pretender ignorar a más de la mitad de la sociedad venezolana, cuyos intereses y mentalidad se formó en los últimos 40 años.

Chávez está atrapado políticamente. Mientras tanto gana tiempo, con un populismo corrupto, como el que practicaron AD y COPEI en su momento. Por un lado, se ha aprovechado de las necesidades reales del pueblo gracias a la renta petrolera; por el otro, se ha beneficiado por la impaciencia, torpeza y errores de la oposición (intento de golpe de estado y paro cívico petrolero) y un liderazgo inteligentemente muy limitado.

El régimen –cada día más autocrático y violento, lo que demuestra su debilidad–, cada vez depende más de las Fuerzas Armadas y éstas, lamentablemente, vuelven a ser el árbitro de la política nacional. Bien sea porque decidan seguir sosteniendo a Chávez, bien sea que decidan colaborar con la sociedad civil y favorecer un desenlace democrático a la crisis.

La transición no va a ser fácil ni breve (son 30 años de problemas acumulados) y tanto en el gobierno como en la oposición, siguen prevaleciendo actores e intereses políticos más vinculados con el pasado que con el futuro. Nuestra esperanza es que la sociedad reasuma su papel protagónico, más allá de las marchas emotivas y vistosas, y obligue a los actores políticos, viejos y nuevos, a cambiar

de verdad, para entrar en sintonía con el mundo y con las demandas y expectativas de la propia sociedad, de todos sus sectores, sin exclusión de nadie. Hay que atender a los más necesitados, con menos retórica y demagogia, y de manera más efectiva y permanente. Pero igual hay que atender al sector trabajador y asalariado y a las clases medias, que hace mucho dejaron de ser sectores privilegiados. En fin, la sociedad venezolana, protagonista de su propio destino, sin caudillos mesiánicos, sin tutoría de las Fuerzas Armadas y sin enajenar o hipotecar su protagonismo a los partidos políticos.

El sistema político venezolano tiene que seguir su marcha hacia la modernidad plena. Hay que democratizar el Estado y el Gobierno, y volver a convertir la democracia en un proyecto educativo, cultural y de desarrollo. Para apuntalar nuestra libertad y responsabilidad, el poder y quienes lo han ejercido en sus diversas modalidades, deben rendir cuentas, particularmente quienes han ejercido el gobierno nacional, regional y local; porque han administrado una cuantiosa renta petrolera que, en teoría debiera haber posibilitado un verdadero y definitivo desarrollo nacional.

El poder y quienes lo han ejercido, casi siempre terminan extraviándolo, abusando y aprovechándose del mismo, desviándolo de su fin natural que es el bien común o bien general. El partido más recurrente de nuestra historia es el de los ladrones del erario público, tanto hoy como ayer. Hemos sido un país de gobiernos ricos y pueblo pobre. Con muy raras excepciones, nuestros gobernantes se aprovecharon de los recursos públicos, hasta la indecencia.

En los últimos 40 años (1958-1998), políticamente hablando, son rescatables los gobiernos de Betancourt, Leoni y la primera presidencia de Caldera. Históricamente vivimos la primera presidencia electa que dura el periodo completo y le entrega el poder a un presidente igualmente electo (Betancourt a Leoni) y, cumplido su lapso legal, éste le entrega la presidencia al principal líder de oposición (Leoni a Caldera). Todo esto que pudiera parecer rutina democrática, pero en Venezuela era excepcional y tenía carácter histórico; así como una Constitución discutida y aprobada de ma-

nera plural, que durara un poco menos de 40 años y que no fuera un simple traje a la medida del presidente de turno.

Lo dicho no significa ignorar o disminuir los errores cometidos en ese período (1959-1973), particularmente el sectarismo partidista y la intolerancia ideológica, pero el balance, en términos de gobierno y políticas, fue positivo a nuestro juicio. Lamentablemente, se persiguió la disidencia y se evitó la discusión crítica de los problemas; los disidentes eran excluidos, algunos perseguidos inclusive y todos ellos estigmatizados como «profetas del desastre». Acción Democrática se suicidó ideológicamente con la exclusión de la disidencia en su seno, de donde surgieron el Movimiento de Izquierda Revolucionario y el Movimiento Electoral del Pueblo.

Particularmente lúcido fue un hombre del gobierno, respetado pero no escuchado, con excepción de algunas políticas petroleras del cual fue inspirador. Me refiero a Juan Pablo Pérez Alfonso, Ministro fundamental en los dos gabinetes de Betancourt, en 1945 y 1959. Con Carlos Andrés Pérez perdió toda audiencia oficial en influencia, particularmente en sus denuncias frente a las locuras de la «Venezuela Saudita». Como él, algunos otros infructuosamente denunciaron sin ningún eco, ni en el gobierno ni en la oposición, y con la indiferencia de una sociedad que vivía su «ilusión de armonía» y prosperidad eterna. Caro pagamos como sociedad haber perdido el sentido crítico de la realidad.

Las «élites», sin excepción, se encerraron en sus privilegios. Políticos, empresarios, académicos y casi todas las instituciones se contaminaron de facilismo e inescrupulosidad. Vivíamos o pretendíamos vivir en un «bonche» permanente, el país «hotel» que denunció José Ignacio Cabrujas. Después caímos en una verdadera incuria política y administrativa, y el gobierno se convirtió en una «lotería o piñata».

Las «élites» vivían psicológicamente fuera del país. El sueño dorado era «Miami» y a ello se sumaron las clases medias. Venezuela se fue descapitalizando en todo sentido, moral y económicamente. Nos endeudamos irresponsablemente y derrochamos recursos, tiempo y oportunidades. La palabra «crisis» se convirtió en

la palabra de moda. Nos asustaba y no la entendíamos. A veces pienso que seguimos sin entenderla, porque en algunos sectores se empeñan en pensar y actuar como si en Venezuela no hubiera pasado nada.

El historiador, mientras se ocupa del pasado, debe pensar en el futuro, como lo quería Kant con su “historia profética”, que no era una historia de bola de cristal o adivinatoria, sino una proyección racional de lo que somos y podemos ser los humanos en búsqueda y construcción de una perfectibilidad progresiva «hacia lo mejor», que no nos conduce a la utopía, pero que nos puede acercar ella.

Venezuela tiene derecho a recuperar su fe en el futuro no como una mítica «Tierra de gracia», sino como un espacio humano digno y libre. Para ello tenemos que asumarnos en la libertad y en la responsabilidad, de todos y cada uno de nosotros. Seguir construyendo y desarrollando un sistema político que nos garantice existir y funcionar de acuerdo a las normas y las leyes inspiradas en la justicia y que no sacrifiquen la libertad.

En función de todo lo anterior, es que el actual gobierno y su tentación hegemónica y autoritaria tiene que ser denunciado —en nombre de la democracia—; pero no solamente la que hemos tenido sino, fundamentalmente, la que tenemos derecho a tener.

Resumen y perspectivas

Emancipados de la monarquía y creada la república nos declaramos libres y soberanos y lo seguimos siendo hasta hoy, como sistema jurídico y político, aunque sociológica y culturalmente la impronta «monárquica» pesa todavía en nuestras instituciones como un atavismo que se niega a desaparecer trocado en un caudillismo anacrónico, pero siempre presente en todas nuestras instituciones y a diferentes niveles jerárquicos.

Piénsese en nuestros caudillos civiles y militares y en la institución presidencial en donde nuestros presidentes, por ley y costumbres se comportan como verdaderos monarcas sin corona. Piensen, igualmente, en cualquier jefe o «jefecito» de nuestras es-

estructuras burocráticas que piensan y actúan como «caciques», o en alcaldes y gobernadores que se creen «reyezuelos» locales.

La arbitrariedad se convierte en norma. Estos sujetos se sienten y asumen por encima de la ley, y confunden los recursos públicos como si fueran propios. Son algunas de las características de estas «repúblicas monárquicas» que no terminamos de superar históricamente. Todavía el año pasado, apenas logramos derrotar un proyecto de reforma constitucional, cuya piedra angular era la presidencia vitalicia y el poder omnímodo del presidente. Razón tenía Simón Rodríguez cuando, angustiado, observaba cómo nuestras repúblicas eran víctimas del caudillismo y de la ignorancia general, y que lo llevó a decir que sin «repúblicas», es decir, republicanos, no hay república.

Feudales eran los «señores» o amos del poder, y esclavos o siervos, eran la mayoría con una débil formación ciudadana y un sentido cívico y civil de la vida social, deleznable. Igual ocurrió con nuestra democracia, tardíamente implantada como proyecto político de una minoría emergente en el tardío 1936, con algunos antecedentes políticos y sindicales, y fraguada en el exilio y la prisión. De 1936 a 1945, tímidamente nos asomamos a la democracia de partidos y a la discusión pública.

El 1945, hubo una eclosión popular de la mano de una alianza cívico-militar y un planteamiento avanzado de democracia que permite, a partir de allí, el protagonismo de los partidos políticos, y con el sufragio universal se incorpora a todos los sectores sociales –mujeres, obreros y campesinos– en la política activa. El resto del trienio fueron excesos verbales y políticos, con mucha impericia y demagogia, que posibilitó el golpe de estado y una larga dictadura de 10 años.

Fue una década de aprendizaje político lo que permitió a los principales líderes partidistas y a las «élites» a entender que un proyecto democrático y de desarrollo obligaba al acuerdo, a la conciliación y al equilibrio, y que fragua en la Constitución de 1961, la más consensuada de nuestras constituciones, y la de más larga duración de toda nuestra historia, lo que habla de la sensatez y sentido

común que en su discusión y redacción prevaleció. El 23 de enero fue una verdadera aurora democrática, celebrada por todos.

La democracia de partidos allí inaugurada tuvo 2 grandes éxitos políticos indiscutibles: el primer gobierno electo que culmina su periodo, con Rómulo Betancourt y el primer gobierno, de nuestra historia, el de Raúl Leoni que, por vía electoral, entrega pacíficamente el poder a un partido de oposición. En esos primeros 20 años de democracia orgánica, el país político y la sociedad se correspondían y retroalimentaban: gobierno y oposición cumplían con su papel y funciones, y los procesos electorales, con todo y sus insuficiencias, limitaciones y desviaciones, eran en general confiables, lo que permitió que los venezolanos se acostumbraran a votar y a entender que no hay otra vía que la electoral para cambiar de gobierno.

En los siguientes 20 años nuestra democracia se extravió y perdió el rumbo. De una democracia orgánica, imperfecta pero perfectible, dentro del Estado de Derechos, pasamos a ser una democracia ineficiente y corrupta cada día más en disonancia con el país político; cada vez más alejada del sentir y de los intereses reales de la sociedad. La palabra de moda fue la palabra crisis y se expresó de diversas maneras en fechas emblemáticas: 1983, 1989, 1992. La respuesta política fue pobre y tardía, en una competencia irresponsable de banalización y superficialidad, ya no sólo de la clase política sino de la sociedad en general. Se pensó en una exreina de belleza para presidente y un poco antes se pensaba en un exitoso animador de televisión.

Se eligió a un casi octogenario en la presidencia sobre un discurso disolvente con respecto a los partidos y a la política, que había agotado y convencido, a la mayoría de la gente. El país estaba desorientado y escéptico con respecto al futuro. La precariedad económica y social creciente, en ascenso, y las «élites» exportando capital y viviendo un exilio espiritual y emocional también creciente.

En este clima se incubaba, desde los 80, una conspiración cuarteraria. Nuestros fantasmas y demonios del pasado, que algunos creían exorcizados para siempre, regresaban para tomar venganza. Vivíamos en una «democracia boba» decadente y autosuficiente, exangüe

y solitaria, y casi sin dolientes. El nuevo liderazgo, formado en los cuarteles y aliado con los desplazados del poder durante más de 40 años, se impone con una mayoría aplastante. A partir de allí, se asume un proyecto político personal y militar, que creó muchas expectativas positivas, agotadas progresivamente por el fracaso en el ejercicio del gobierno. La democracia, por lo menos en la forma, ha logrado sobrevivir, especialmente a partir del 2 de diciembre del 2007, cuando los venezolanos lograron recuperar la confianza de que el régimen era derrotable y que su tiempo se acababa.

Con la confianza también se minimiza el temor y el miedo al gamonal en el poder. Lo demás es cuestión de tiempo, lo que no significa cruzarse de brazos. La oposición ha dejado de actuar a la defensiva y se organiza en torno a estrategias de gobierno y poder alternativas, y ella misma se hace plural y diversa y ojalá termine siendo, oportuna y eficaz.

Cada día es mayor el número de personas que perciben en los actuales liderazgos cansancio, corrupción y fracaso como gobernantes. El actual presidente es epígono, síntesis, símbolo y metáfora de todas las limitaciones y desviaciones del poder asumido de manera anacrónica, y que nuestra historiografía ha demostrado gráficamente al destacar la egolatría y la megalomanía de Guzmán, su corrupción y culto a la personalidad. Igualmente en el histrionismo crapuloso del Cabito, con su retórica irresponsable que llegó a comprometer seriamente los intereses nacionales. Con razón el historiador Germán Carrera Damas nos llama a dejar atrás definitivamente el siglo XIX y Elías Pino Iturrieta nos invita a matar simbólicamente a JV Gómez.

En casi 200 años, la República no llegó a ser totalmente y con la democracia seguimos en mora, a pesar de los innegables avances logrados en el siglo XX. Kant nos recomienda no profetizar, pero racionalmente se pueden proyectar algunas hipótesis o posibilidades con respecto a los futuros inmediatos posibles o deseables. La agenda política nacional en el 2008 tiene una dinámica fundamentalmente electoral para nuestro gusto, ojalá sea favorable a la oposición en una agenda de oposición democrática que se constituye en alternativa de

poder para el proceso electoral presidencial del 2012. Otra hipótesis es la anticipación de la salida del poder del actual presidente; por su propia estrategia de «confrontación y crisis» y la real crisis que nos acosa desde la economía y lo social.

Cualquiera sea el escenario, lo racional es construir políticamente una alternativa de gobierno, amplio y plural, con un programa realizable, aplicable y que permita revertir el actual proceso de desastre nacional sustentado en un proyecto personal de poder y una ideología estatista-militarista. A todos nos toca comprometernos con la democracia y la alternabilidad. De allí que no descarto, en el escenario 2008-2009, un proceso constituyente de relegitimaciones de poderes, con participación activa de actuales opositores y factores que en algún momento apoyaron el proyecto político de Chávez.

Venezuela ni empezó ayer ni se acaba hoy, aunque en su proceso político ha tendido a prevalecer lo irracional y lo antihistórico, como por ejemplo la negación sistemática del pasado, el presentismo mágico y el voluntarismo infantil, propio de una mentalidad mágica y primaria. En Venezuela queremos que las cosas sean ya, como un acto de magia siempre a favor de uno mismo y como sea, más allá de toda norma o ley. La mayoría no asume responsabilidades y no está dispuesto a rendir cuentas.

He dicho que parte del drama nacional tiene que ver con nuestras características antropológicas, societarias y culturales, no en un sentido genético-determinista ni mucho menos racial, sino como conducta reiterada y reproducida de un colectivo alienado desde el poder y la riqueza petrolera, y por la inorganicidad, precariedad o inexistencia de una cohesión social básica. En cierto momento, esto nos ha constituido y constituye en una «sociedad enferma», cuya permisividad y complicidad tienden a ser manifestación de una colectividad abandonada en sus carencias, pero también en sus responsabilidades. Complementario a todo lo anterior tenemos la historia mito que domina nuestra conciencia histórica.

Además, tenemos otros mitos paralizantes y alienantes como por ejemplo la «riqueza mágica», del país que es de todos y no llega

LOMBARDI, Ángel

a casi nadie, apropiada desde el poder y la corrupción por una minoría de pícaros y delincuentes. Es la versión moderna de «El Dorado» o el mito del «líder carismático», el hombre fuerte y necesario que nos viene a mandar y a resolver todos nuestros problemas.

Vivimos un tiempo detenido, una involución política enmarcada en una crisis de «pueblo» que dura 30 largos años. Unos personajes de ópera bufa dominan el escenario político, tanto en el oficialismo como en la oposición con las excepciones del caso. Anacrónicos en su conducta y mentalidad, siguen atrapados en las páginas de la ejemplar novela de Rómulo Gallegos, *Doña Bárbara*. Civilización y barbarie sigue siendo nuestro principal combate. Una sociedad atrapada en sus propias limitaciones y contradicciones, circunstancia «pesimista» que, paradójicamente, nos debe empujar a un optimismo histórico equidistante entre la realidad y nuestros mejores sueños civiles, societarios y culturales.

Como dijera Augusto Mijares en *Lo afirmativo venezolano*, nos toca a todos terminar de fundar la República y la democracia sobre la continuidad creadora y el cambio reflexivo. Estamos en el siglo XXI, y ello nos obliga a recuperar el futuro sobre un proyecto racional de país republicano y democrático, en el justo sentido de estas dos palabras que tanto nos comprometen como individuos y como sociedad.